

Justificante de firma de documento

Fecha de generación: 14/01/2015 18:14

Nombre del documento: Resolución 395

Relación de firmantes

| Datos del firmante | Grafo de firma manual | Fecha de firma | Información de firma |
|------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| ANGELINA TRIGO PORTELA | | 14/01/2015 09:48 | Firma |

Este documento es un justificante de firma que permite recuperar el archivo de firma digital original (el único con validez legal) introduciendo el código CSV ubicado en el margen izquierdo en la siguiente dirección: <https://sedempr.gob.es/es/sede/csv>



Con fecha 12 de diciembre de 2014 tuvo entrada en el Portal de la Transparencia del Gobierno de España solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud de [REDACTED] que quedó registrada con el número 000395.

Con fecha 5 de enero de 2015 esta solicitud se recibió en la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto para su resolución en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre.

La pregunta, si bien se refiere literalmente al acceso estadístico al registro de llamadas al centro de emergencias 060, parece que en realidad se está refiriendo al número 112 que es el que gestiona las emergencias.

El 060 es el número reservado al "Servicio de Información de la Administración General del Estado", y por ello el único número "corto" atribuido en exclusiva a la Administración General del Estado (al margen de los números de servicio especiales de emergencias y urgencias).

El 112 trata de ser la asistencia más inmediata posible a las demandas de los ciudadanos de todo el país que se encuentren en una situación de riesgo personal o colectivo.

El Real Decreto 903/1997 establece la necesidad de que los operadores de redes telefónicas públicas y de servicios de telefonía básica, de redes digitales de servicios integrados y de redes de telefonía móvil automática, realicen las adaptaciones técnicas necesarias para permitir la implantación del número telefónico 112 como número único de acceso a los servicios de atención de urgencias en todo el territorio nacional.

Por otra parte establece que los ciudadanos podrán utilizar de forma gratuita este número 112 para pedir, en casos de urgente necesidad, la asistencia de los servicios públicos que se requieran en servicio de urgencia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, de seguridad ciudadana y de Protección Civil, cualquiera que sea la Administración pública de la que dependan.

Este servicio se llevará a cabo por las Comunidades Autónomas que para ello, establecerán los correspondientes centros de recepción de llamadas de urgencia.

De acuerdo con la letra d) del apartado 1 del artículo 18 de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a la información pública cuando estén dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.

Una vez analizada la solicitud, la Directora de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, considera que la misma incurre en el expositivo precedente toda vez que la información que se solicita no se encuentra en la Administración General del Estado.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en la letra d) del artículo 18.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se deniega el acceso a la información pública cuya solicitud ha quedado identificada en el párrafo primero de esta resolución.

A juicio de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, son competentes para conocer de la solicitud de acceso que se deniega mediante la presente resolución, las Comunidades Autónomas, entidades a las que deberá dirigirse el solicitante para recabar la información.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa) ,en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente Resolución.